

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ELISABET MORALES
DEMANDADO	AFP PROTECCION S.A.
VINCULADA	PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS
RADICADO	05001-31-05-015-2020-00294-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
DECISIÓN	CONFIRMA

Medellín, veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **ELISABET MORALES**, contra la **AFP PROTECCION S.A.** y en la que se dispuso vincular a **PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 019**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de ELISABET MORALES, (demandante inicial) e igualmente conocer el asunto, bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RÍOS (interveniente ad excludendum), respecto de la sentencia que profirió el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 12 de septiembre de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora ELISABET MORALES, es madre biológica del señor JORGE MARIO LUJAN MORALES, quien nació el 27 de mayo de 1986 y quien falleció el pasado 25 de mayo de 2020, luego de padecer una tortuosa enfermedad.

Refiere el introductorio que, JORGE MARIO LUJAN MORALES, estaba afiliado al Sistema de Seguridad Social y cotizaba al fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.

Narra la demanda que, el señor JORGE MARIO LUJAN MORALES, ayudaba con la manutención, alimentación y salud de su madre, quien tenía respecto de éste una **dependencia económica parcial**.

Indicó la demanda que, ELISABET MORALES padece de una enfermedad degenerativa y catastrófica, requiere tratamientos médicos especialísimos, así como de medicamentos de alto costo, muchos de ellos fuera del POS, por lo que requería de la ayuda económica que su hijo le suministraba, situación de salud y personal que aún persisten.

Señaló la demanda que, para ayudar con la manutención y cuidado de su madre, el causante aportaba en promedio mensual entre quinientos y seiscientos mil pesos, los cuales en algunas ocasiones entregaba de manera personal, otras por intermedio de su hermana, y otras a través de la cuenta de ahorro del esposo de la demandante.

Por último, se aduce que para el momento de la muerte de JORGE MARIO LUJAN MORALES, éste convivía con la señora PAOLA GUILLEN RIOS, por espacio de un año, sin conocer más detalles de dicha convivencia, pues aquel era reservado con su vida personal, no obstante, se aseguró que la señora GUILLEN RIOS, presentó ante Protección reclamación de la pensión de sobrevivientes.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se DECLARE que la señora ELISABET MORALES, es beneficiaria del 100%, de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su hijo señor JORGE MARIO LUJAN MORALES, ocurrida el 25 de mayo de 2020.

En consecuencia, que se **CONDENE** a la AFP PROTECCION a: **i)** Reconocer y pagar el 100% de las mesadas desde la estructuración de dicha contingencia. **ii)** Reconocer el valor de las mesadas retroactivas y las mesadas adicionales. **iii)** Reconocer intereses moratorios. **iv)** Reconocer el auxilio funerario, e indexación, hasta el momento del pago efectivo. **v)** Reconocer el pago de los conceptos que *“en caso de existir valores causados y no cobrados por el causante con anterioridad a su fallecimiento, dichos valores serán pagados por la gerencia de nómina a las personas que llegasen a tener derecho sobre los mismos”* **vi)** Subsidiariamente se pide reconocer y ordenar la devolución total de los aportes. **vii)** Reconocer costas y agencias en derecho.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

La AFP PROTECCION dio respuesta oportuna a través de su apoderado judicial, según consta en el archivo PDF N° 9, aceptando como ciertos los siguientes hechos: La vinculación del causante a la AFP y la reclamación administrativa presentada por la accionante, madre del afiliado y de PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, en calidad de compañera permanente del afiliado.

Agregó la entidad que, en la investigación administrativa se estableció que ninguna de las dos solicitantes tiene la calidad de beneficiaria del causante.

Frente a la señora ELISABET MORALES, se argumentó que no se encontraron reunidos los requisitos que la acreditaran como beneficiaria de la pensión de sobreviviente, al no depender económicamente de su hijo fallecido, pues si bien éste le podía efectuar aportes esporádicos, los mismos no eran determinantes para el sostenimiento de la señora Morales, y que ello se vislumbra en el hecho de que el afiliado fallecido tenía establecido su domicilio en un lugar diferente al de la demandante, inclusive que durante un periodo de tiempo vivió en un apartamento propiedad de la demandante y le pagaba arriendo a ésta, y con convivencia con la señora Paola Andrea Guillen Ríos. Igualmente se adujo que la demandante obtiene ingresos propios derivados de arriendos de propiedades a su nombre y que los gastos de su hogar son asumidos por su esposo el señor Iván Darío Quintero Zapata.

Respecto de la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RÍOS, se aseguró que no se encontró cumplidos los requisitos que la hiciera beneficiaria de la pensión de sobreviviente, en su condición de compañera permanente, ello por cuanto la convivencia con el afiliado fallecido no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003.

Agregó que la AFP, reserva el valor de los saldos de la cuenta del afiliado fallecido a la espera de la sucesión, y que ante la entidad se presentó reclamación y soportes de pago del Auxilio funeral por la señora Evelin Ruth Guillen de la Ossa, por lo que el mismo le fue cancelado a dicha reclamante.

La AFP se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa la **excepción previa** de **falta de integración del litisconsorcio por pasiva**, respecto de la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RÍOS, teniendo en cuenta que ante la Administradora presentó solicitud de pensión de sobreviviente.

A título de excepciones de mérito planteó las siguientes: *"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, COBRO DE LO NO DEBIDO, RECONOCIMIENTO PRESTACIÓN SUBSIDIARIA - DEVOLUCIÓN DE SALDOS, COMPENSACIÓN, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN"*

Mediante auto del 24 de marzo de 2021, el despacho dispuso la vinculación de PAOLA ANDREA GUILLEN RÍOS, en calidad de interviniente ad excludendum (PDF 10)

En escrito visible en el PDF 12, la interviniente manifestó que conformó con el causante una unión de vida estable, permanente y singular, con mutua ayuda, tanto económica como espiritual, la cual se prolongó en el tiempo de manera continua por **más de 2 años**, desde el día 5 de agosto de 2017 hasta el 25 de mayo de 2020.

Se adujo, además, que la señora Paola Guillen, para la fecha del fallecimiento de su compañero permanente, no se encontraba laborando, y dependía económicamente de éste, pues debido a la enfermedad del causante, la señora GUILLEN RÍOS, se retiró de su trabajo para dedicarse al cuidado de su compañero; razón por la cual, los dos dependían sólo del dinero que a él le ingresaba para suplir solo sus gastos, los cuales eran bastantes, debido a la enfermedad que el causante padecía.

Describe la demanda que la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, elevó a la AFP Protección SA, solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su compañero permanente, el señor JORGE MARIO LUJÁN MORALES; la cual fue negada por la AFP Protección S.A mediante comunicado del 16 de enero de 2021, por no acreditar el tiempo de convivencia exigido.

Menciona además la demanda que la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente deprecada, teniendo en cuenta que el causante el momento de su fallecimiento contaba con más de 50 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento; y de conformidad a la posición adoptada por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en la sentencia SL1730 de 2020 MP. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN, al indicar que el supuesto del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado, y en este caso el causante era afiliado al SGSS.

Invocó a título de pretensiones:

Que se declare que la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión al fallecimiento de su compañero permanente el señor JORGE MARIO LUJÁN MORALES.

En consecuencia, que se CONDENE a la AFP PROTECCIÓN S.A: **i)** al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, como compañera permanente del señor JORGE MARIO LUJAN MORALES, desde el día 25 de mayo del año 2020, fecha de su fallecimiento. **ii)** Reconocer y pagar a la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. **iii)** Que todas las sumas de dinero sean debidamente indexadas. **iv)** Reconocer las costas y agencias en derecho.

La AFP PROTECCIÓN, contestó la demanda (PDF 14), oponiéndose a los hechos y pretensiones y planteando a título de excepciones de fondo las siguientes: *"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, COBRO DE LO NO DEBIDO, RECONOCIMIENTO PRESTACIÓN SUBSIDIARIA - DEVOLUCIÓN DE SALDOS, COMPENSACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE RECONOCIMIENTO PENSIONAL EN FORMA VITALICIABUENA FE, PRESCRIPCIÓN"*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, la A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 12 de septiembre de 2022, DECLARÓ que la señora ELISABET MORALES, no cumple con el requisito de dependencia económica para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes deprecada con ocasión del fallecimiento del señor Jorge Mario Luján Morales.

Igualmente DECLARÓ que la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, no cumple con el requisito del tiempo mínimo de convivencia para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes deprecada con ocasión del fallecimiento del señor Jorge Mario Luján Morales.

En consecuencia, de lo anterior, declaró próspera la excepción de inexistencia de la obligación formulada por PROTECCION S.A., al contestar tanto la demanda inicial, como la demanda de la interviniente ad excludendum.

ABSOLVIÓ a PROTECCION S.A., de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes deprecada por las señoras ELISABET MORALES y PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, así como de todas y cada una de las demás pretensiones que ambas interpusieron en su contra.

CONDENÓ en costas a ELISABET MORALES y PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS y a favor de la AFP PROTECCION S.A.

Como fundamento de su decisión, (PDF 23- 24) estimó la juez de primer grado en lo atiente a las **pretensiones de ELISABET MORALES** que: **i)** analizada la prueba de manera integral y separada, ELISABET MORALES no logró demostrar la dependencia económica para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes deprecada con ocasión del fallecimiento de su hijo Jorge Mario Luján Morales, por cuanto la prueba extrajuicio allegada con el escrito de demanda, no es suficiente para generar al juez, el convencimiento de la dependencia económica.

Puntualizó la A quo, que, de acuerdo a la investigación administrativa de Protección, tanto la señora Elisabet Morales, como otros familiares suyos y vecinos, se concluye lo siguiente: **1)** Que el causante antes de fallecer, llevaba conviviendo por el lapso de dos años con la señora Paola Andrea Guillen Rios, en calidad de compañera permanente, de lo cual aseguró la sentenciadora que no era probable que el causante tuviera la capacidad económica de velar por las obligaciones de su hogar y las de su madre. **2)** Que tanto el causante como su madre, vivían en residencias diferente. **3)** Que el causante y su pareja residían en una vivienda de propiedad de la demandante Elisabet Morales, y que aquel le pagaba a su madre por concepto de arriendo \$650.000. **4)** Que la demandante Elisabet Morales, tiene esposo, quien devenga \$1.439.000, con los cuales asume el pago del impuesto predial y la alimentación del hogar.

Aseguró la A quo que, si bien se corrobora de las declaraciones que el causante daba aporte económico a su progenitora, lo cierto es que, dicho aporte

es una mera ayuda, mas no se constituye en una dependencia económica, ni completa ni absoluta. **ii)** Respecto de la pretensión de reconocimiento y pago de auxilio funerario, dijo que la misma no tenía la vocación de prosperar, considerando que PROTECCION acreditó que pagó ese concepto a Evelin Ruth Guillen de la Ossa. **iii)** En cuanto a la pretensión de devolución de los aportes del causante, argumentó la A quo, que la misma también está llamada a fracasar, pues ante la falta de beneficiarios, esa suma de dinero hace parte de la masa sucesoral del causante, conforme lo dispone el artículo 77 de la ley 100 de 1993.

En lo que concierne a las **pretensiones de PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS**, arguyó la A quo, que acoge íntegramente la postura de la Corte Constitucional, en la sentencia SU 149 de 2021, que refiere sobre la exigencia de convivencia mínima de cinco años, y que en el caso en concreto, dicha situación no se acreditó, como quiera que la señora GUILLEN RIOS, manifestó en el interrogatorio de parte, que convivió con el causante por el lapso de dos años, situación que se corroboró con las declaraciones de juicio allegadas.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia de primera instancia fue apelada por el apoderado judicial de la demandante ELISABET MORALES.

Argumentó el recurrente que se aparta de las consideraciones jurídicas expuestas por la juez de primera instancia, advirtiendo, que en el expediente existen pruebas documentales, como testimoniales, que demuestran lo contrario, las cuales no fueron tachadas, ni merecieron ningún reparo por la parte demandada.

Refirió que el causante aportaba económicamente y de forma permanente y hasta el momento de su muerte, a su señora madre, dinero con el cual ésta logró sobreponerse a la situación calamitosa de enfermedades y le permitía tener estabilidad a su núcleo familiar.

Dijo también que los testigos traídos por la parte demandante, fueron claros, veraces y precisos, en manifestar bajo la gravedad de juramento, que efectivamente los \$600.000 mil pesos que aportaba el causante a su madre, eran constantes y que el aporte, a la señora ELISABET MORALES, los dedicaba, al sostenimiento personal y de su núcleo familiar.

Exaltó el recurrente que la prueba documental, sobre las enfermedades ruinosas padecidas por la demandante le impedían y le impiden desempeñarse laboralmente.

Señaló que las pruebas que la A quo dice no darles valor alguno, esto es, las declaraciones extrajuicio que se presentaron con la demanda, las mismas dan testimonio de que efectivamente la demandante dependía económicamente de su hijo.

Sostuvo que el análisis realizado por la A quo para dar al traste con la demanda absolutoria, no se ajustan a la realidad planteada en los hechos y pretensiones de la demanda, por lo que, solicitó sea revocada la decisión de primera instancia y se analice las pruebas aportadas.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente el **apoderado de PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS**, señaló que su poderdante cumple con los requisitos de ley para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del afiliado JORGE MARIO LUJÁN MORALES.

Reiteró que entre la causante y la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, conformaron una unión de vida estable, permanente y singular, con mutua ayuda tanto económica como espiritual, la cual se extendió por dos años.

Indicó que la señora PAOLA ANDREA GUILLEN, renunció a su trabajo para dedicarse de lleno al cuidado su compañero permanente.

Expuso que en el proceso quedó probado que, para la fecha del fallecimiento del señor JORGE MARIO LUJÁN MORALES, su madre, la señora

ELISABET MORALES, no dependía económicamente de éste, pues ella contaba con la ayuda de su cónyuge, además, tiene casa propia e incluso el causante le llegó a pagar arriendo por ocupar un apartamento de su propiedad, el cual también le generaba ingresos.

Finalmente expuesto que la posición de la Corte Suprema, ha sido enfática al determinar que la exigencia de convivencia mínima, solo es exigible en caso de muerte del pensionado, según la sentencia SL5270-2021, lo cual a su juicio se ha convertido en doctrina probable del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, entre otras, lo reitera también en sentencia reciente como es la SL2833-2022, donde se indicó lo siguiente: *“Se reitera que, esta Sala, tiene decantado que, en caso de muerte del afiliado, la norma no contempla un requisito de tiempo mínimo de convivencia para que los cónyuges o compañeros permanentes ostenten la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, puesto que, tal requisito, solo fue instituido para el caso de fallecimiento del pensionado, así quedó sentado en la sentencia SL5270-2021, reiterada, entre otras, en las CSJ SL803-2022, CSJ SL2047-2022”*

Por su parte el **apoderado de la AFP PROTECCION**, solicitó que se confirme íntegramente la sentencia de primera instancia.

Argumentó el apoderado que como a bien lo tuvo la A quo, luego de analizar la prueba arrimada al proceso, no es posible determinar, ni la dependencia económica de los padres y menos aún la existencia de convivencia del causante en los términos exigidos por la norma.

Explicó que como se acreditó desde la misma investigación administrativa, lo cual quedó ratificado con la prueba practicada en el proceso, el causante antes de fallecer convivió con Paula Andrea Guillén, sin que se haya dado cumplimiento al requisito mínimo de permanencia de cinco años.

Agregó además que, tampoco logró acreditarse que el causante, además de asumir las obligaciones económicas propias del hogar formado con Paula Andrea, tuviera siquiera la capacidad económica para velar por el sostenimiento económico de su madre Elisabet Morales, quien vivía en una residencia diferente a la del causante.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de sobrevivientes

Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, y que se conoce el asunto en consulta a favor de la interviniente ad excludendum, los problemas jurídicos estriban en dilucidar: **I)** si el afiliado fallecido, dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios **II)** si la demandante ELISABET MORALES, madre del causante y/o PAOLA ANDREA GUILLEN, compañera permanente; lograron acreditar los requisitos legales para ser consideradas beneficiarias de la prestación económica que por esta acción judicial reclaman **III)** y solo en caso afirmativo pasará la sala a establecer la fecha de disfrute pensional, el retroactivo adeudado, la procedencia de los intereses moratorios y/o la indexación de las condenas.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

- ❖ La muerte del afiliado JORGE MARIO LUJAN MORALES, insuceso acaecido el 25 de mayo de 2020, hecho que se prueba con el registro civil de defunción que obra en el pdf 01 folio 14.
- ❖ Que la demandante ELISABET MORALES es la progenitora de JORGE MARIO LUJAN MORALES, de acuerdo al registro civil de nacimiento del causante que obra en el pdf 01 folio 12.
- ❖ Que ELISABET MORALES y PAOLA ANDREA GUILLEN, presentaron reclamación de pensión de sobrevivientes ante la AFP PROTECCION, sin embargo, la entidad negó las reclamaciones económicas. Pdf 9 folio 30 y 31.

Pues bien, a fin de dilucidar las normas con las cuales debe resolverse el asunto en cuestión, es claro que es la fecha de fallecimiento del afiliado (a) o

del pensionado (a), la que determina la disposición legal que ha de gobernar el derecho a la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, ello por fuerza de la aplicación general e inmediata de la ley laboral en el tiempo, tal y como lo ha entendido de vieja data la jurisprudencia de la Corte en atención a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. (ver entre otras la Sentencia del 20 de febrero de 2008, rad. N° 32649)

En el caso bajo estudio, la fecha del fallecimiento del señor JORGE MARIO LUJAN MORALES, acaeció el 25 de mayo de 2020, por tanto, las normas que se encontraban vigentes y que regulaban la prestación de sobrevivientes, eran las contenidas en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados respectivamente por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que establecieron los requisitos que se deben acreditar para causar la pensión y ser considerado beneficiario de aquella prestación.

Dispone el artículo 12 de la ley 797 de 2003:

“Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

- 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,*
- 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento:***

El requisito de la causación en el caso de marras, no es objeto de controversia por esta sala, como quiera que, si bien no se acredita el número de semanas cotizadas por el causante, en la respuesta dada por la AFP PROTECCION, tanto a la demandante, como a la ad excludendum, tal exigencia se echa de menos y el único cuestionamiento que realizó la AFP se circunscribe a si las peticionarias, cumplen o no con el requisito para ser consideradas beneficiarias de la pensión de sobrevivientes del señor JORGE MARIO LUJAN MORALES, quien tiene vinculación al RAIS desde el 23 de septiembre de 2004 (pdf 9 folio 13 y 32)

Ahora y en relación con los beneficiarios de la pensión de sobreviviente el artículo 13 de la ley 797 de 2003, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 13: Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

- a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.*
- b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión.*

Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a). Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; (...)

Literal d) del artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, normativa que establece lo siguiente: “a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los **padres del causante si dependían económicamente de éste**”.

La dependencia económica en pensión de sobrevivientes en favor de padres, por hijo fallecido.

Frente al alcance de la dependencia económica, se tiene que la modificación traída por la Ley 797 de 2003, que establecía que la dependencia económica de padres a hijos debía ser total y absoluta, fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-111 de 2006.

La ausencia de una definición legal de la dependencia económica, determinó la necesidad de fijar su alcance por vía jurisprudencial; en este contexto, la jurisprudencia ha identificado un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente a partir de la valoración del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular, lo que ha llevado a concluir que la dependencia no se desvirtúa por el hecho que los padres perciban ingresos por su propio trabajo o recursos de otras fuentes, siempre y cuando éstos no los conviertan en autosuficientes. Así ha quedado expuesto entre otras, en la sentencia T-456 de 2011 que fija reglas para determinar la dependencia económica.

En conclusión, depender económicamente de alguien, supone un criterio de necesidad, un sometimiento o sujeción al auxilio recibido de tal manera útil e imprescindible que, de no obtenerlo, se pondría en peligro la subsistencia del subordinado al no poder sufragar los gastos diarios.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, ha reseñado respecto a la dependencia económica de los padres, en sentencia con radicación No. 25.069 de 2.006 lo siguiente:

“Este criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación a que se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que sólo puede ser definida en cada caso concreto”.

En materia de pensión de sobrevivientes, ha estimado la jurisprudencia del trabajo que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas. Así lo ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como puede verse entre otras, en la sentencia del 24 de noviembre de 2009, con radicado 36.026, en la cual dejó sentado que:

“Es importante precisar que a la demandante que pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, es a la que, en principio, le corresponde probar, por cualquier medio de los legalmente autorizados, su dependencia económica del occiso, y cumplido lo anterior, será el demandado quien deberá demostrar dentro de la contienda judicial, la existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que le permitan ser autosuficiente.”

Y en la sentencia SL15260 de 2017, rad. 56784, La Corte reiteró lo siguiente:

“...La dependencia económica que conforme el criterio jurisprudencial de esta Sala, posibilita el acceso a una pensión de sobrevivientes, debe contar, por lo menos, con tres elementos a saber: que sea cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; que la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacia el presunto beneficiario; y que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste, por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de suerte que si recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia...”

Conforme al criterio jurisprudencial que antecede, resulta claro para la Sala que la entidad de la ayuda económica por la que se reclame la calidad de beneficios padre-hijo en una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, no se encuentra determinada tanto por el quantum de la misma, sino por la importancia y determinación que esta pueda tener en determinado contexto socio económico familiar.

Convivencia de la cónyuge o compañera permanente del causante

En relación con el requisito de convivencia al que alude el literal a) de la citada normativa, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL-32.393 de 2008, SL-45.600 de 2012, SL-793 de 2013, SL-1402 de 2015, SL-14068 de 2016 y SL-347 de 2019, reiteró por mucho tiempo que *“para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañero o compañera permanente, la convivencia debe ser de cinco (5), independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado...”*.

No obstante, dicha postura fue variada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-1730 de 2020, donde expuso frente al requisito de convivencia mínima con el afiliado fallecido, lo siguiente:

“Con lo anterior, la Sala fija el verdadero alcance de la disposición acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado.

Sin embargo, también debe advertirse por parte de esta Magistratura, que en providencia reciente SU-149 de 2021, la Corte Constitucional, tomó una postura distinta a la prevista en la sentencia del 3 de junio de 2020 (SL 1730 de 2020), de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que había considerado que los cónyuges o compañeros permanentes de los afiliados al sistema de pensiones no debían acreditar un tiempo mínimo de convivencia, reafirmando que la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge o (la) el compañero permanente es de 5 años, **independientemente si el causante es un afiliado o un pensionado**, veamos:

“...La Sala encontró que la acción de tutela cumplió todos los requisitos generales de procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales proferidas por las Altas Cortes. Al analizar el asunto de fondo, concluyó que, en efecto, la providencia emitida por la Corte Suprema de Justicia incurrió en violación directa de la

Constitución, desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y en defecto sustantivo.

Sobre la violación directa de la Constitución, la Sala sostuvo que se desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. La distinción introducida por la Corte Suprema de Justicia, al disponer que la exigencia al cónyuge o la compañera o compañero permanente de acreditar el mínimo de cinco años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante solo era aplicable cuando estos fueran pensionados, mas no en el caso de los afiliados, no armoniza con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia. Así mismo, esa diferenciación carece de una justificación objetiva que atienda al principio de igualdad, por lo que resulta arbitraria.

La violación directa de la Constitución también se presentó por desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Este precepto se desconoce cuándo se reconocen derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. Esto ocurrió en el presente caso al dejar en firme la providencia que ordenó el reconocimiento pensional a la compañera permanente, pese a no demostrar la convivencia de cinco años exigida en la ley. A esta razón se suma, que la regla sentada por la Corte Suprema de Justicia incrementaría en un número importante el número de personas que se harían acreedoras de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia y el pasivo pensional aumentaría en 461% según estimaciones aportadas por el Ministerio de Hacienda en sede de revisión. Así, al no tenerse en cuenta el requisito de convivencia de la peticionaria con el afiliado, se omite el criterio de distribución de recursos escasos que es necesario para evitar una afectación desproporcionada a las finanzas del Sistema General de Pensiones, lo que redundaría en la vulneración de los principios de universalidad y sostenibilidad financiera.

Asimismo, la Sala Plena determinó que en la decisión de la Sala de Casación Laboral se configuró un defecto sustantivo por interpretación irrazonable del precepto legal aplicable al caso analizado. Sostuvo que la lectura acogida por la Corte Suprema de Justicia partía de una hermenéutica plausible del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. No obstante, en concordancia con lo expuesto sobre la violación directa de la igualdad y la sostenibilidad financiera del sistema pensional, dicha interpretación contradecía principios constitucionales y conducía a resultados desproporcionados respecto de la desprotección del grupo familiar ante reclamaciones pensionales ilegítimas y en relación con la finalidad de la pensión de sobrevivientes, que es amparar a la familia del fallecido.

Por último, para verificar la configuración del desconocimiento del precedente, la Sala determinó que el precedente aplicable en la materia es la Sentencia SU-428 de 2016. La Sala de Casación Laboral se apartó indebidamente de esa decisión pues no cumplió con las cargas de transparencia y suficiencia de la argumentación. No mencionó explícitamente su apartamiento del precedente fijado por la Corte Constitucional ni mucho menos expuso en forma adecuada las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados. Esto a pesar de que

se trataba de un fallo de unificación que determinaba, con carácter vinculante, el contenido y alcance del derecho a la seguridad social ante el problema jurídico materia de decisión en el asunto de la referencia...”
(Negrillas de la Sala)

Cabe advertir que, si bien la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio expuesto en la sentencia SL-1730 de 2020, entre otras, en las sentencias SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021, y SL 3309 de 2022, **teniendo en cuenta que la anterior sentencia de unificación constituye un precedente vertical sobre la materia, dado que proviene del órgano de cierre constitucional que, como resalta ese mismo alto tribunal, fijó el contenido y alcance del derecho a la seguridad social ante el problema jurídico materia de su decisión, como también el de la igualdad respecto de ese tema, resalta esta colegiatura**, es clara la fuerza vinculante que dicha providencia irradia frente a todos los administradores de justicia, incluido este tribunal de distrito judicial, quienes no puede apartarse de lo allí resuelto, pues tal precedente limita la autonomía judicial en tanto debe respetarse tal postura; y si bien pudiera separarse esta Sala de tal precedente, con la motivación rigurosa exigida para ello según lo ha indicado la Corte Constitucional, no encuentra razones para hacerlo, al compartir el criterio indicado por el órgano de cierre constitucional en la sentencia SU 149 de 2021 a que se hizo referencia.

Es pertinente advertir, que, en tratándose de compañera o compañero permanente, los 5 años de convivencia deben haber ocurrido previo al fallecimiento del causante, es decir, que al momento del fallecimiento debió existir convivencia (Ver sentencia SL1399-2018).

CASO CONCRETO

Teniendo en cuenta lo anterior, pasa la sala a determinar si la demandante ELISABET MORALES, en condición de madre del causante, y la vinculada ad excludendum PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, en condición de compañera permanente, lograron acreditar o no los requisitos para ser

consideradas beneficiarias de la pensión de sobreviviente que reclaman por el fallecimiento del afiliado JORGE MARIO LUJAN MORALES.

Respecto de la **pretensión de ELISABET MORALES**, la sala destaca los siguientes elementos de juicio.

- ❖ De la prueba documental se hace notar tres pantallazos de transacciones bancarias de BANCOLOMBIA, por valor de \$250.000, \$10.000 y \$350.000, que datan del 15 y 22 de mayo de 2020 y que suman en total \$610.0000.



- ❖ Se allegó con el escrito de demanda, la historia clínica de la demandante ELISABET MORALES, que da cuenta que la misma padece de lupus eritematoso sistémico y osteoporosis (pdf 03 folio 25)
- ❖ En lo que atañe a la prueba extrajuicio allegada con el escrito de demanda, rendida por LUZ ANGELA QUINTERO RESTREPO y MONICA ELENA PULGARIN PULGARIN, se remarca lo siguiente: “*e/ causante era quien con sus ingresos asistía económicamente **todas las necesidades y obligaciones de su madre**, quien es ama de casa, está desempleada, no es pensionada, **no recibe renta**, salarios, ni subsidio de ninguna índole, por lo tanto, **dependía en un 100% de él**”*. Pdf 03 folio 18

- ❖ En el interrogatorio de parte absuelto por la demandante ELISABET MORALES, ésta manifestó que actualmente es separada y que no laboraba actualmente —(Audio 23 Minuto 29:54) aseguró que para el año 2020, las personas que aportaban a su hogar eran su esposo IVAN DARIO QUINTERO ZAPATA y JORGE MARIO, acotando que Diana, su hija, no laboraba para ese entonces, pues solo estudiaba. (Audio 23 Minuto 31:15) Dijo la demandante, que los aportes del esposo para el hogar, eran aproximadamente de \$800.000, con los cuales pagaba todo lo de la casa, los servicios, la comida, y con el aporte de su hijo, quien le daba \$600.000 mensuales, lo determinaba para sus gastos personales y de salud. Al respecto señaló textualmente *“El dinero que me entregaba mi hijo era para todo lo mío, cosas personales, para ir a citas, exámenes, y todos los gastos míos. Mi hijo me entregó ese dinero hasta antecitos del fallecimiento, por ahí dos meses antes.”* (audio 23 minuto 48:40) y añadió que su ex esposo **devengaba un salario para el año 2020 de \$1.300.000**. Comentó la demandante que, entre **marzo de 2019 a marzo de 2020, le arrendó una propiedad a su hijo y éste le pagaba \$600.000**. Se le preguntó a la demandante, en relación con las consignaciones que se aportaron con la demanda, pues en los hechos del libelo genitor, se expresa que dichas consignaciones corresponden al aporte que le realizaba su hijo y contestó: (audio 23 minuto 33:50) que el pago del arrendamiento era directo, en físico, tratando de dar a entender que se trataba de pago en efectivo. Refirió la actora que su hijo iba a su casa y le daba el aporte, aseguró que nunca utilizaba a otra persona para hacer los pagos. Ahora, el apoderado de la AFP PROTECCION, cuestionó a la demandante del motivo por el cual en la demanda se expresa que los reportes de consignación anexos corresponden al aporte económico que le daba el causante a la demandante, mientras que en el interrogatorio de parte, se asegura que los pagos los hacía el causante en efectivo, a lo cual respondió la señora ELISABET MORALES, que: *“él veces le mandaba la plata así, pero casi siempre le llevaba la plata en efectivo a la casa”*, precisando que lo del arriendo no tiene nada que ver, con el aporte que le daba su hijo para sus cosas personales. Finalmente expuso que, al momento de la muerte, su hijo vivía con su compañera permanente con quien **permaneció 18 meses juntos**.

- ❖ De otro lado, para la sala, resulta de gran importante, la declaración de DANIELA QUINTERO MORALES, testigo traída a instancia de la parte demandante, hija de esta y medio hermana del causante (audio 23 minuto 1.05.00), quien declaró:

*“Mi mamá es una persona analfabeta, con enfermedad de base como lupus, osteoporosis y el túnel del Carpo, ha sido una persona independiente hasta que yo tuve 18 años, como trabajadora ambulante en una esquina y que lamentablemente por su condición física ya no ha podido solventarse económicamente como antes. Mi hermano conocía esta situación, y le dio una ayuda o un respaldo económico **hasta momentos previos a su muerte, hasta que pudo**. Mi madre no tiene la posibilidad estudiantil para poder ocupar un cargo en una empresa y su condición física le impide laborar como lo venía haciendo de trabajadora ambulante. **Mi padre se encargaba de todos los gastos del hogar y mi hermano de los gastos de salud de mi mamá**. La casa es propia, de propiedad de mi papá, **mi papá labora**, mi papá y mi mamá tuvieron una convivencia de 20 años, desde que yo nací hasta el año pasado, hasta noviembre de 2021, después de la muerte de mi hermano. **No recuerdo el año a partir del cual mi hermano empezó a realizar los aportes a mi mamá, mi hermano empezó a trabajar desde que tenía 17 años, pero eran trabajos de taxistas y aportaba para los servicios y en los gastos como tal de la casa, pero el aporte para mi mamá, para su salud y enfermedad fue cuando tuvo un mejor cargo cuando él era tecnólogo, como en el año 2017 o 2018, empezó con una ayuda fija a mi mamá de \$600.000 mensuales, se los llevaba personalmente en efectivo. para ese entonces él vivía en la casa, luego se organizó con la señora Paola.** (minuto 1.13.48) **luego aun siguió la misma ayuda, él tuvo claro, porque era muy buen hijo. El arrendamiento en el apartamento del tercer piso que era propiedad de mi padre, ellos pagaban \$600.000, no se hizo contrato legal, fue verbal por cuestiones familiares, a veces se pagaba por transferencia y a veces físico, y este dinero iba destinado a un embargo que tenía mi padre precisamente por la deuda de la casa, ese dinero se lo debitaban a mi padre de la cuenta y luego ese dinero se utilizaba para cubrir los gastos del hogar.***

Ante la pregunta de la juez que si el pago del arriendo era diferente al aporte que le hacia el causante a la madre dijo la declarante: *“**Era diferente los pagos que mi hermano hacía, era la cifra \$600.000 y lo empezó hacer desde el año 2017 a finales o 2018 no tengo claridad, hasta momentos previas a su fallecimiento, estamos hablando dos meses antes de que él falleciera. Mi mamá laboró en ventas publicas hasta el año 2018, cuando mi hermano empezó con la ayuda económica,*** (minuto 1.21.20) *sin embargo, y por temas que mi*

*hermano falleció, y no ha habido ayudas económicas, y que yo devengo menos de un mínimo, **mi mamá ocasionalmente hace ventas** postres, tamales, morcilla, para su solvento económico. Los gastos del hogar eran \$1.300.0000, **y los asumía mayor parte mi padre. La separación de mis padres está en proceso.** No se ha realizado la partición de bienes. Están en ese proceso. Mi padre ganaba \$1.300.00 mensuales para el año 2020. Mi hermano ganaba como \$4.700.000 mensuales desde el año 2018 o 2019, por un ascenso que le tuvo”.*

- ❖ Asimismo, conviene destacar la declaración de SANDRA MILENA QUINTERO ZAPATA, (hermana de IVÁN DIARIO QUINTERO esposo de la demandante) testigo traída a instancia de la parte demandante, quien manifestó (audio 23 minuto 1.39.00) que la demandante es su cuñada, aseguró que el causante le ayudaba a su madre y que ello le consta, dada la cercanía con la familia, pero enfatizó que no estuvo presente cuanto el causante le entregaba dinero a su madre, que eso lo comentaba mucho Elisabet. Aseguró que la demandante vendía empanadas los fines de semana, pero desconoce el monto de lo que ganaba, puntualizando que actualmente la actora hace unas “venticas” para poderse sostener, asintiendo a su vez, que cuando él causante se fue de la casa, le seguía ayudando a su madre, sin embargo, reiteró que eso se lo decía Elisabet, y que ella **nunca vio cuando se le entregó el dinero.**

Contrario a lo aducido por la demandante y la declarante Daniela, esta testigo manifestó que la propiedad que se arrendó al causante, era de su propiedad, afirmando además que **“ellos le pagaban arriendo a mi esposo, como \$600.000, ese dinero era para el esposo mío, EDINSON AGUIRRE.”** (audio 23 minuto 1.53.48).

- ❖ En la investigación administrativa adelantada por la AFP PROTECCION, se surtió entrevista con la demandante quien manifestó que laboró hasta el año 2018, vendiendo empanadas y recibía por parte del causante la suma de **\$700.000** y que, además, recibe apoyo de su esposo IVAN DARIO QUINTERO ZAPATA, ya que éste labora y devenga \$1.439.000, precisando que su esposo, no tiene créditos ni deudas con entidades financieras. (PDF 9 folio 16). Posteriormente aclaró la reclamante que el apartamento del tercer piso en donde convivió el causante con la

compañera permanente, no es de su propiedad, sino de la hermana del esposo de la demandante.



GROUP S.A.S

2

La reclamante es de estado civil casada, convivía con su esposo Iván Darío Quintero Zapata y su hija Daniela Quintero Morales residente en la Avenida 45B # 65 – 18 AP 201 barrio Niquía en Bello – Antioquia.

El causante antes de fallecer se encontraba trabajando en la empresa ARUS como ingeniero en sistemas generando un ingreso de \$4.700.000; tenía unos gastos de pago de un apartamento, pago de un vehículo; pago de arrendo; igualmente se encontraba estudiando en la universidad UNIMINUTO, la reclamante no aporta los valores.

La reclamante señala que por cuestiones de salud trabajo hasta el año 2018 vendiendo empanadas en la calle, no tiene ingresos, señala que recibía por parte del causante la suma de \$700.000, los cuales utilizaba en: ropa \$ 300.000, citas médicas \$ 300.000, pasajes \$100.000. La reclamante recibe apoyo de su esposo Iván Darío Quintero Zapata ya que él trabaja y tiene un sueldo de \$1.439.000, y cancela los servicios públicos \$ 125.000, una \$113.500, alimentación \$600.000, funeraria \$13.500, no tienen créditos, ni deudas con entidades financieras.

El causante tres (3) meses antes de fallecer vivió en el barrio árboles. La reclamante indica que el causante y su compañera permanente convivieron durante 2 años y nueve meses, y en agosto cumplían los 3 años de convivencia. Sin embargo, el causante y su compañera permanente mantuvieron una relación de noviazgo durante aproximadamente 14 años.

La reclamante aclara que posee únicamente un inmueble el cual se encuentra ubicado en la avenida 45B # 65 – 18 Segundo Piso Apto 201 Bello – Antioquia. Niega ser propietaria de otro inmueble.

Aclara que el apartamento del tercer piso ubicado en la misma dirección en donde convivió el causante con la compañera permanente no es de su propiedad, este inmueble es propiedad de la hermana del esposo de la reclamante.

Ahora, adentrándonos en el análisis de las razones que motivaron la negativa pensional por parte de la juez de primer grado, se encuentra que ésta obedeció a que, la A quo concluyó que, si bien de las pruebas recaudadas se constata que el causante daba aporte económico a su progenitora, lo cierto es que, dicho aporte es una mera ayuda, más no se constituye en una dependencia económica, ni completa, ni absoluta.

Pues bien, el apoderado de la parte demandante al plantear su recurso de apelación, discrepó de la decisión adoptada por la juez de primera instancia, señalando que la prueba documental y testimonial, arrimadas al proceso; demuestran que el causante aportaba económicamente, de forma permanente y hasta el momento de su muerte, a su señora madre, dinero con el cual ésta logró sobreponerse a la situación calamitosa de enfermedades y le permitía tener estabilidad a su núcleo familiar.

Dijo también que los testigos traídos por la parte demandante, fueron claros, veraces y precisos, en manifestar bajo la gravedad de juramento, que efectivamente los \$600.000 mil pesos que aportaba el causante a su madre, eran constantes y que el aporte, la señora ELISABET MORALES, los dedicaba, al sostenimiento personal y de su núcleo familiar.

En sentir de la Sala, valorada en su conjunto la totalidad de la prueba arrojada a las diligencias, se encontró que la aquí demandante no cumplió con su carga de probar la dependencia económica de su hijo JORGE MARIO LUJAN MORALES, al momento de su muerte, que permitiera evidenciar un sometimiento o sujeción de la señora ELISABET MORALES, al auxilio recibido de su hijo fallecido, de tal manera que, no obtenerlo, ponía en peligro su congrua subsistencia.

En efecto y como lo concluyó la juez de la primera instancia, es incuestionable que el causante daba un aporte económico a su madre, de manera periódica, no obstante, lo anterior, no se puede desconocer que:

- 1) De acuerdo a la declaración rendida por Daniela y lo afirmado por la demandante en la investigación administrativa, el aporte económico que dio el causante a su progenitora, surgió a finales del año 2017 o empezando el año 2018, fecha que coincide con la época en que la actora aduce dejó de laborar (año 2018), y que se extendió, hasta antes de la muerte del causante, **como unos dos o cinco meses, antes, debido a la enfermedad de cáncer que lo aquejaba.**
- 2) Que pese a que se adjuntó como prueba documental tres recibidos de consignación por valor de **\$610.0000**, con el propósito de demostrar los aportes que realizaba el causante a la madre, lo cierto es que, los mismos datan de **mayo de 2020**, época para la cual según la declaración de la demandante ELISABET MORALES, la testigo Daniela y la versión de la señora Paola, para dicha data, el causante no daba aportes a su madre, pues nótese que en el interrogatorio de parte la actora confesó que su hijo le dio aportes “**hasta antecitos del fallecimiento, por ahí dos meses antes**”, por lo que tal recaudo probatorio no es demostrativo del **monto** que entregaba el causante a su madre. Lo anterior resulta de

gran importancia, por cuanto si bien la compañera permanente del causante PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, reconoció que efectivamente su compañero le daba aportes a su madre, la misma señaló que los pagos los hacía por la suma de **\$150.000** quincenales y que los mismos fueron entregados hasta **cinco meses antes de que éste murió**. Agregando además la sala, que la demandante no tiene certeza del monto que mensualmente realizaba su hijo, dado que sus manifestaciones resultas contradictorias, pues en el hecho sexto de la demanda (pdf 06 folio 4) se refiere a una cuantía de entre \$500.000 o \$600.000, en el interrogatorio de parte la demandante aseguró que el causante le daba \$600.000, mientras que en la investigación administrativo, señaló que el aporte correspondía a **\$700.000**, situación que no es de poca monta, por tratarse del aporte cuya invocación se atribuye como dependencia económica.

- 3) No pasa por alto esta sala que, para el momento del fallecimiento del causante, el señor IVAN DARIO QUINTERO, padrastro de aquel, y esposo de la demandante, se encargaba de los gastos del hogar y devengaba más de \$1.300.000, de acuerdo a lo confesado por la demandante, lo cual se acompasa con la declaración de la testigo DANIELA, quien también hace parte del núcleo familiar, destacándose que la demandante reconoció que su esposo se encargaba de todos los gastos del hogar.
- 4) Se subraya además que el núcleo familiar de la actora, tenía otras fuentes de ingreso, pues entre el año 2019 a 2020, la demandante confesó que arrendó a su hijo una vivienda por la suma de \$650.000.
- 5) En las declaraciones extrajucio, se aduce que la demandante dependía **100%** del causante, lo cual no se probó en este caso, pues como bien lo confesó la demandante, el aporte que le daba su hijo lo empleaba para sus asuntos personales y de salud y que en especial, su esposo ayudaba con los gastos del hogar, destacándose en este aspecto, que el hecho cuarto de la demanda, se expresa que la dependencia **económica era parcial**.

4. En vida el señor JORGE MARIO LUJAN MORALES ayudaba con la manutención, alimentación y salud de su madre, que tenía que respecto de este una dependencia económica parcial.

Así las cosas, para la Colegiatura como bien lo consideró la A quo, la ayuda económica que realizaba el causante a su madre, representa la ayuda propia del buen hijo, pero a juicio de esta sala, en ninguna forma puede entenderse como dependencia económica, pues claramente el hogar de la señora ELISABET MORALES generaba sus propios ingresos, sin que la falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, la demandante hubiera experimentado una dificultad **relevante para garantizar sus necesidades básicas**¹; destacando además este colegiado que, si bien la actora adujo que el aporte económico que le otorgaba el causante lo destinaba particularmente para el pago de los medicamentos de alto costo que debía sufragar a raíz de su condición de salud, lo cierto es que, si bien en el plenario quedó probada la patología que afecta a la demandante, no se acreditó que la destinación de los aportes estuviesen relacionados con el supuesto factico al que apela la actora, esto es, a su situación de salud, motivos por los cuales, se CONFIRMARÁ la sentencia venida en apelación por encontrarse ajusta a la realidad fáctica y probatoria de la litis.

Ahora y en cuanto a la **pretensión de PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS**, la cual se analiza en grado jurisdiccional de consulta, la sala recalca los siguientes elementos probatorios.

- ❖ En el **hecho segundo** de la demanda de la ad excludendum, se expresa: *“Que la unión marital de hecho se prolongó en el tiempo de manera continua **por más de 2 años**, que existió desde el día 5 de agosto de 2017 hasta el 25 de mayo de 2020”*
- ❖ Las declaraciones extrajuicio allegadas por la parte y rendidas por YENIFER MARYEI ARCILA IDARRA, BRIGITTE MONSALVE MARIN, y GERALDIN DAHYANA LUJAN FORONDA, expresan al unísono que entre el causante y la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, existió una convivencia desde el 05 de agosto de

¹ Sentencia

2017, en la que compartieron techo lecho y mesa, hasta el día del fallecimiento del causante, es decir, hasta el 25 de mayo de 2020 y en la cual no tuvieron hijos. pdf 12 folio 15, 17.

- ❖ En la investigación administrativa adelantada por la AFP PROTECCION, la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS, declaró que convivió en unión libre con el causante **por espacio de 33 meses** y mantuvo una relación de noviazgo de 14 años, no tuvieron hijo y que no es conocedora de la existencia de otras relaciones o hijos. Pdf 19 folio 30.

8. ENTREVISTAS

Compañera Permanente:

El día 21 de diciembre de 2020 se entrevista mediante llamada telefónica a la señora **PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS**; Cedula 1.020.433.199 de Bello - Antioquia, nacida el 04 de julio de 1990 en Medellín - Antioquia de 30 años de edad, profesión psicóloga;

RADICADO S20N18007. C.C. 1020395684. INV. MARIO CARRILLO. INF. 1115. BELLO- ANTIOQUIA



5

residente en la calle 68 sur # 45 – 70 barrio Santa Ana en sabaneta - Antioquia, Teléfono 3226673490, en calidad de COMPAÑERA PERMANENTE del causante, en entrevista telefónica, de manera libre y voluntaria, manifestó lo siguiente:

La entrevistada indica que convivió en unión libre con el causante por un espacio de 33 meses y mantuvo una relación de noviazgo 14 años, no tuvieron hijos y que no es conocedora de la existencia de otras relaciones o hijos.

- ❖ En el Interrogatorio de parte absuelto por PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS (minuto 54:35), relató que el causante convivió con ella hasta el momento de su muerte, y convivieron desde el 05 de agosto de 2017. Dijo que recuerda la fecha en que inició la convivencia con Jorge, por cuanto ese día se casó una amiga de nombre Isabel González, y en la mañana fue con su pareja al matrimonio, y en la tarde se pasaron al apartamento que habían arrendado.

Señaló que antes de iniciar la convivencia, Jorge vivía con Elisabeth su madre, su padrastro y su hermana media Daniela.

Aseguró que el causante le daba un aporte económico a su madre hasta diciembre de 2019, por cuanto para ese entonces le diagnosticaron cáncer, y ella dejó de trabajar para permanecer con él y brindarle los cuidados y la atención necesaria, asumiendo Jorge para aquel entonces, todos los gastos del hogar, vivienda, alimentación, y por esa razón dejó de darle la ayuda a su mamá. (audio 23 minutos 56:40)

Expuso que ella y el causante convivieron en un inmueble de propiedad de la demandante, en el cual le pagaban a Elisabet \$650.000, dinero que pagaban ambos de sus salarios y el cual se extendió por un año. Finalmente dijo que, al terminar el contrato de arrendamiento, hubo requerimientos por parte de la demandante al causante, por el pago de unos días de arriendo.

En relación con el aporte económico afirmó la declarante que, el causante adicionalmente al arriendo, le daba a su madre una ayuda de **\$150.000 quincenales**, asegurando que “él era muy buen hijo”, y le daba dinero a su madre para que ella se lo gastara en las cosas que quisiera. A la pregunta de cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que cesa el aporte y el momento en que fallece el causante. Respondió: “*eso fue en diciembre y el murió en mayo, cinco meses*”

- ❖ A instancia de la interviniente ad excludendum, rindió declaración GERALDIN DAHYANA LUJAN FORONDA (audio 23 minuto 1.06.46), quien expresó que la pareja tuvo una relación de noviazgo durante 14 años, y luego en agosto del **año 2017 se independizaron**. Aseveró la declarante que es hermana media del causante por parte paterna y que su padre en común falleció. Dijo que antes de la convivencia en pareja, Jorge vivía con el padrastro, la mamá y la hermana media Daniela, y que Jorge le pagaba arrendamiento a la mamá. Afirmó que su hermano le decía que le daba la “liga” a la mamá, para que aquella comprara las cositas, pero aseguró que él no era la persona encargada de ella, sino su esposo, agregando que la señora Elisabet trabajó hasta el momento de la muerte de Jorge, en el negocio de las

empanadas y de la morcilla y que Jorge Mario estuvo 5 meses complicado en UCI y en casa incapacitado debido a su enfermedad.

- ❖ Igualmente, a instancia de la interviniente ad excludendum, rindió declaración YENIFER MARYEI ARCILA IDARRA, (audio 23 minuto 2.32.38) quien expuso que por medio de su pareja conoció al causante hace 15 años, testificando que el causante vivía con la mamá y una hermana. Que Jorge Inicialmente manejaba taxi y que sus recursos los destinaba para sus estudios en la universidad Uniminuto y que luego empezó a trabajar en algo de sistemas. Refirió que la pareja vivía en la casa de la mamá en un tercer piso, pero que pagaban arriendo y que Jorge le daba la “liga” a la mamá.

Luego de una valoración conjunta de las pruebas arrimadas al proceso, bajo las reglas de la sana critica, tal y como lo ordena el artículo 176 del Código General del Proceso, estima la Sala que en el plenario existe la certeza suficiente para declarar insatisfecho el requisito de convivencia mínima de cinco años entre PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS y el causante.

Para esta Colegiatura, la declaración de PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS en la investigación administrativa, y en particular la confesión realizada al absolver interrogatorio de parte, sumado a las declaraciones extrajudio y las traídas al plenario, son indicativos de que la convivencia entre Paola Andrea y el causante no cumple la exigencia mínima de convivencia.

Con base en lo anterior, para la sala no cabe duda que la convivencia entre PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS y el señor JORGE MARIO LUJAN MORALES, se desarrolló desde 05 de agosto de 2017- hasta el fallecimiento del afiliado, lo cual ocurrió el hasta el 25 de mayo de 2020, habiendo transcurrido en ese interregno **2 años, 9 meses y 20 días**, de lo cual se concluye el incumplimiento del tiempo de **convivencia mínima de cinco años requeridos**, para que la señora PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS sea beneficiaria de la pensión de sobreviviente, carga probatoria que estaba a su cargo conforme lo establece el artículo 167 del CGP; por lo que habrá se CONFIRMARÁ la sentencia en ese punto, que absuelve a la demandada de la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

En las circunstancias descritas, y teniendo en cuenta que para este colegiado los medios allegados ofrecen credibilidad en el sentido que la demandante **ELISABET MORALES**, en condición de madre del causante, no cumple con el requisito de dependencia económica para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, y que la señora **PAOLA ANDREA GUILLEN RIOS**, en condición de compañera permanente, no logró demostrar el tiempo mínimo de convivencia de cinco años en acogimiento del precedente constitucional previsto en la sentencia de la Corte Constitucional SU-149 de 2021, esta sala **CONFIRMARÁ** íntegramente la sentencia de primer grado.

COSTAS PROCESALES

Las costas procesales estarán a cargo de la parte demandante ELISABET MORALES y en favor de la AFP PROTECCION S.A. Las agencias en derecho en segunda instancia ascienden a la suma de \$300.000.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación y Consulta, de conformidad a lo expuesto.

SEGUNDO: COSTAS en costas procesales de segunda instancia a cargo de la parte demandante ELISABET MORALES y en favor de la AFP PROTECCION S.A; las agencias en derecho en segunda instancia ascienden a la suma de \$300.000, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA